

Cesión de datos de colegiados. Informe.389/2006

La consulta plantea si resulta conforme con la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal que, por una Consejería de Sanidad, se solicite del hospital consultante un certificado de colegiación de los profesionales que desarrollan su actividad en dicho centro hospitalario, emitido por el correspondiente colegio profesional, así como una copia auténtica del Título Universitario correspondiente.

Asimismo, la consulta se refiere a la adecuación a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de la cesión por parte de la consultante a la referida Consejería de la copia íntegra de los contratos, laborales o mercantiles, que regulan la relación jurídica entre el Hospital y los profesionales en cuestión.

I

Pues bien, el acceso por parte de Administración de la Comunidad Autónoma a los mencionados datos constituirá una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, como “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En relación con la comunicación de datos, siendo los cedentes en el presente caso el Hospital consultante, debe recordarse que el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 establece que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”, previéndose en el artículo 11.2 una serie de excepciones que, a los efectos que interesan en el presente supuesto, quedan limitados a la contenida en el apartado a) que prevé la posibilidad de cesión inconsciente “cuando la cesión esté autorizada por una Ley”.

Por tanto, será necesario que exista una norma con rango de Ley estatal o autonómica que habilite la cesión inconsciente de los datos, o en su caso, contar con el consentimiento de los interesados. En todo caso, debe recordarse que el artículo 4.2 de la Ley Orgánica exige que los datos sean tratados únicamente para la finalidad que motivó su recogida, sin que quepa emplear dichos datos personales para una finalidad distinta.

En el presente supuesto, la solicitud de cesión cursada por la Administración de la Comunidad Autónoma, se fundamentaría en el control de la ordenación general de las actividades sanitarias de las entidades públicas y privadas de la Comunidad Autónoma establecido por la Ley 1/1993, de 6 de abril de Ordenación del Sistema Sanitario.

Así, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33 (Actuaciones) de dicha norma:

“1. Las Administraciones de la Comunidad Autónoma, en relación con las actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan repercutir en la salud individual y colectiva, realizarán las siguientes actuaciones:

a) Establecimiento de registros y sistemas de análisis de la información necesarios para el conocimiento de las distintas situaciones de las que puedan derivarse acciones de intervención de la autoridad sanitaria.

b) Exigencia de autorización administrativa y registro previo para la creación, funcionamiento, modificación o supresión de Centros, servicios y establecimientos sanitarios y socio-sanitarios de cualquier nivel, categoría o titularidad.

Las referidas autorizaciones podrán comportar, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la homologación y acreditación de dichos Centros, servicios y establecimientos.

c) Inspección de todos los Centros, servicios y establecimientos sanitarios y socio-sanitarios de Castilla y León y el control de sus actividades de promoción y publicidad.

d) Seguimiento, evaluación e intervención en relación con la satisfacción de los derechos a la protección de la salud, reconocidos por las Leyes a todos los ciudadanos.

e) Exigencia de autorizaciones sanitarias de funcionamiento a todas las industrias, establecimientos y actividades alimentarias, así como el seguimiento o los controles e inspecciones de los procesos desarrollados por los mismos.

f) Establecimiento, control e inspección de las condiciones higiénico-sanitarias de funcionamiento y desarrollo de actividades, locales y edificios de convivencia pública o colectiva y, en general, del medio en que se desenvuelve la vida humana.

g) Ordenación y ejercicio de las funciones de policía sanitaria mortuoria.

h) Cualesquiera otras actuaciones que le vengan legalmente atribuidas.

2. La Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma desarrollará sistemas de información que permitan evaluar estas actuaciones y, en su caso, diferenciar sus dotaciones presupuestarias”.

Para ello, de acuerdo con lo dispuesto por el propio artículo 33, y concordantes (34 y 35) de dicha Ley 1/1993, la Comunidad Autónoma realiza, entre otras, las actuaciones de control e intervención en relación con la salud, a través de la autoridad sanitaria.

Dicho texto legal, prevé que las Administraciones de esta Comunidad Autónoma, exijan la autorización administrativa y registro previo para la creación, funcionamiento, modificación o supresión de centros, servicios y establecimientos sanitarios y socio-sanitarios de cualquier nivel, categoría o titularidad. Esta actuación de control de los centros servicios y establecimientos sanitarios, así como el mantenimiento de los registros que sean necesarios, se desarrolla a través de la Consejería de Sanidad, de la Comunidad.

Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece que mediante Real Decreto se determinarán con carácter básico, las garantías mínimas de seguridad y calidad que deben ser exigidas para la regulación y autorización por parte de las comunidades autónomas de la apertura y puesta en funcionamiento en su respectivo ámbito territorial de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.

En este sentido, el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios establece una nueva clasificación, denominación y definición común de los mismos para todas las Comunidades Autónomas y crea un Registro y un Catálogo General de dichos centros.

La adaptación de la normativa de la Comunidad Autónoma a la del Estado, que tiene carácter de legislación básica para todas las Comunidades Autónomas, se realiza mediante el Decreto 49/2005, de 23 de junio.

El Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios se crea como instrumento de publicidad y ordenación adscrito a la actual Dirección General de Salud Pública y Consumo, en el que se deben inscribir la autorización de funcionamiento y renovaciones administrativas y comunicaciones previstas en el propio Decreto.

Este Registro, tiene carácter público, obligatorio y gratuito, debiendo respetar en todo caso lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La inscripción en el registro se efectúa de oficio una vez concedida la autorización, renovación o comunicación, no suponiendo ningún trámite adicional.

Por Orden de 8 de marzo de 2001, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, se regulan las características, organización y funcionamiento del citado Registro. De dicha Orden de desarrollo deriva, entre otros datos, la exigencia de los relativos al número de registro del Centro, la denominación del mismo, el tipo de servicio o establecimiento, su dirección, la titularidad del propio Centro, la finalidad asistencial del mismo, y el tipo de gestión al que se encuentra sometido.

Las citadas normas reglamentarias incorporan un desarrollo directo de las competencias conferidas por las mencionadas Leyes estatal y autonómica, y asumidas por la Comunidad Autónoma en el ámbito propio de su actividad y de su territorio.

En este sentido, entendida la necesidad de llevar a cabo el necesario control de colegiación de los profesionales como medida de control, tanto para garantizar la seguridad y calidad del servicio, como para evitar el intrusismo profesional, a nuestro juicio, resulta proporcionado a la finalidad pretendida por la Administración, el acceso a los datos correspondientes a los certificados de colegiación de los profesionales, así como a la copia auténtica del título universitario correspondiente, resultando dicha finalidad amparada por lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario.

En conclusión, el conocimiento de los datos de carácter personal requeridos por la Administración a los titulares del Centro hospitalario consultante, tendría la finalidad de evitar el ejercicio de la profesión por quienes no cumplieran el mencionado requisito, garantizándose tanto la calidad y seguridad de la atención sanitaria, como la prevención del intrusismo profesional y el control del ejercicio de la profesión colegiada.

Estas finalidades coincidirían con las funciones legalmente atribuidas a la Administración actuante por la Ley 1/1993, de 6 de abril de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla León, y por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, quedando plenamente amparadas las cesiones de los datos contenidos en los títulos profesionales y en los certificados de colegiación por lo previsto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

II

La segunda de las cuestiones planteadas por el consultante se refiere a la adecuación a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de la cesión por parte de la consultante a la referida Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la copia íntegra de los contratos, laborales o mercantiles, que regulan la relación jurídica entre el Hospital y los profesionales en cuestión.

Pues bien, utilizando idéntica argumentación jurídica que la expuesta en el **Punto I** de este Informe, se alcanza que, al contrario de lo que se indica en el caso anterior, para este supuesto la cesión no se encontraría amparada en una habilitación legal, y en consecuencia resultaría contraria a lo dispuesto por el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, no siendo por ello la cesión conforme con lo dispuesto en la mencionada Ley.

Además, dicha comunicación de datos resultaría, por excesiva, contraria a lo dispuesto en relación con el principio de calidad de los datos por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica, cuando exige que “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes **y no excesivos** en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.